

30
cuenta

Exp.:
Esp.:
Escrito: N° 1
Cuaderno Principal
Sumilla: Acción Popular



LA SALA

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

La **ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA (AIDSEP)**, organización representativa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, constituida legalmente como asociación e inscrita en la Partida Electrónica N° 11007275 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, debidamente representada por el señor **HENDERSON RENGIFO HUALINGA**, Presidente, identificado con D.N.I. N° 41311642, con domicilio real en la Calle Pevas N° 1239, Maynas - Iquitos - Loreto; a usted atentamente decimos:

Que recurrimos a su despacho a fin de interponer la presente acción de popular, contra:

- A. El **Ministerio de Cultura (MINCU)**, asumiendo su defensa judicial su **Procurador Público**, a quien se le deberá notificar en **Av. Javier Prado Este N° 2465- San Borja**.
- B. El **Viceministerio de Interculturalidad (VMI)**, asumiendo su defensa judicial su **Procurador Público**, a quien se le deberá notificar en **Av. Javier Prado Este N° 2465- San Borja**.

I. PETITORIO

En pleno ejercicio de la legitimación reconocida por el inciso 5) del artículo 200° de la Constitución y artículos del 75° al 97° de la Ley N° 28237 (Código Procesal Constitucional), interponemos **DEMANDA DE ACCION POPULAR** contra el **Ministerio Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad**, con el objeto que se deje sin efecto la **Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785**, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios, publicada el 03 de abril del 2012 y la **Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC**, "Procedimientos para aplicación de lo dispuesto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 29785" publicado el 27 de junio del 2016, **ambas por contravenir** el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, aprobado por Resolución Legislativa N° 26253, y los artículos 2, 3, 5 y 9 de la **Ley N° 29785**, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios específicamente porque crean un supuesto de exoneración de la consulta previa (por servicios públicos) no prevista por las normas de mayor jerarquía y

51
Cuenta
y uno

desnaturalizar la ley que reglamentan, razón por la cual se debe dejar sin efecto las normas cuestionadas en su totalidad.

En la sentencia, que oportunamente expida la honorable Corte Superior de Justicia de Lima, se deberá declarar la inconstitucional e ilegalidad de la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo 001-2012-MC y la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC que la desarrolla la misma, en su totalidad, así como disponer su nulidad con efectos desde la fecha de su publicación.

Sustentamos la presente **DEMANDA DE ACCION POPULAR** en la exposición de motivos que se desarrolla a continuación:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

2.1. ANTECEDENTES.-

La **Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo 001-2012-MC**, publicada el 03 de abril del 2012, que aprueba el Reglamento de la Ley de Consulta previa, asimismo la citada disposición cuestionada versa sobre Educación, Salud y Provisión de Servicios Públicos, y señala explícitamente que *"la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el Reglamento"*, contraviniendo así, el literal a) del artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, aprobado por Resolución Legislativa N° 26253; los numerales 17, 19 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú así como los artículos **los artículos 2, 3, 5 y 9** de Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa. En consecuencia, debe dejarse sin efecto la **Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC** en su totalidad.

Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC, publicado el 27 de junio del 2016, que aprueba el procedimiento para la aplicación de la **Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 29785- Ley de Consulta Previa**, contraviniendo así, el literal a) del artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, aprobado por Resolución Legislativa N° 26253; los numerales 17, 19 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú así como los artículos 2, 3 y 5 de Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa. En consecuencia, debe dejarse sin efecto la **Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC** en su totalidad.

Adviértase que ni la **Ley N° 29785**, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios ni el **Convenio 169** de la OIT establecen supuestos de exoneración de consulta previa para ninguna medida que afecta pueblos indígenas, por ello la reglamentación realizada por la **Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la**

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios, publicada el 03 de abril del 2012 y la **Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC**, "Procedimientos para aplicación de lo dispuesto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 29785" publicado el 27 de junio del 2016, desnaturalizar la ley que reglamentan, razón por la cual se debe dejar sin efecto las normas cuestionadas en su totalidad.

2.2. DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ.-

El Perú es un país pluricultural, multiétnico y diverso, en donde coexisten varios pueblos y grupos étnicos, organizados generalmente en pueblos andinos y amazónicos, que poseen conocimientos científicos y tecnológicos, medicina tradicional, valores culturales, idioma, formas de organización política y social, modelos de desarrollo socio económico, maneras de administrar recursos naturales, diferentes prácticas de ejercer autoridad y administrar justicia, así como de conservar sus tierras y territorios.

Conforme a la verificación objetiva de nuestra realidad y la consiguiente reconocimiento constitucional, el Perú definitivamente es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe. Así, de acuerdo al Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú¹, en el país existen 72 etnias, 7 ubicadas en el área andina y **65 en el área amazónica**, las cuales se agrupan en 14 familias lingüísticas indígenas². Según otras fuentes, la heterogeneidad de la población peruana se manifiesta actualmente, en la coexistencia de 43 lenguas: 39 son amazónicas, una lengua en fase de estudio y 3 lenguas andinas: el quechua, aymará y jacura. Todas ellas agrupadas en 17 familias lingüísticas. Los tres grupos etnolingüísticos más numerosos de la Amazonía son: Asháninka 57,998, el Awajum (Aguaruna) 45,137 y el Shipibo 20,178. Según los registros del Ministerio de Agricultura, los pueblos indígenas del Perú están organizados mayoritariamente en 5,826 comunidades campesinas³ -andinas y costeñas-reconocidas⁴ y 1,265 comunidades nativas⁵ -amazónicas- inscritas⁶. De acuerdo a la misma fuente, las comunidades campesinas ocupan una extensión superficial de 16'706,952.7557 has. y agrupan aproximadamente a 1'041,587 familias. Las comunidades nativas ocupan una extensión superficial de 9'269,332.3145 has. Y agrupan aproximadamente a 45,791 familias.

En la actualidad en el Perú existen aproximadamente 5818 Comunidades Campesinas⁷ y más de 1345 Comunidades Nativas⁸; la Constitución Política

¹ Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú. Ministerio de Agricultura. Instituto Indigenista Peruano-1994.

² Familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí que tienen un origen común, las cuales son habladas por los pueblos o etnias.

³ Comunidades Campesinas: Organizaciones reducidas de pueblos indígenas de los andes y costa del Perú, con personería jurídica, cuya actividad principal se desarrolla en base a la Agricultura y Ganadería.

⁴ Directorio de Comunidades Campesinas del Perú. PETT. Ministerio de Agricultura (Información a octubre de 2001).

⁵ Las poblaciones indígenas amazónicas no sólo se agrupan bajo la forma legal de comunidades nativas, sino que teniendo en cuenta su organización territorial y socio cultural frente a la sociedad nacional, minoritariamente también pueden ser reconocidas y analizadas con la tipología siguiente: pueblos indígenas aislados; poblaciones indígenas remotas y dispersas; poblaciones indígenas rurales dislocadas y fragmentadas; poblaciones ribereñas; e indígenas urbanos /OIT: Moore).

⁶ Directorio de Comunidades Nativas del Perú. PETT. Ministerio de Agricultura (Información a diciembre de 1999).

⁷ Fuente: III Censo Agropecuario 1194- Directorio de Comunidades Campesinas del PETT 2002.

⁸ Fuente: Base de Datos de Comunidades Nativas del PETT-2003 - CD room Defensoría del Pueblo.

53
Cuenta
y tres

vigente, reconoce la existencia de las comunidades campesinas y nativas desde épocas inmemoriales, condicionado su existencia a su reconocimiento legal e inscripción en los Registros Públicos, respetando la identidad cultural de dichas comunidades. La mayoría de las comunidades vive en condiciones de extrema pobreza e inferior calidad de vida que la población nacional. La pobreza estructural y la discriminación racial, afectan a los pueblos indígenas con mayor intensidad, restringiéndoles el pleno goce de sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

2.3. RESPECTO A LA JERARQUÍA LEGAL DEL CONVENIO 169 DE LA OIT FRENTE A LA DÉCIMO QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DEL D.S 001-2012-MC Y LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 013-2016-VMI-MC

El Convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, el orden y el equilibrio. Su incumplimiento trae aparejada una sanción. Y está por encima de las normas con rango de ley, su jerarquía normativa es categóricamente superior.

El Tribunal Constitucional -TC señala que los "tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional" (STC N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33). De tal manera, habiéndose aprobado el Convenio N.° 169 mediante Resolución Legislativa N.° 26253, publicada el 5 de diciembre de 1993, su contenido pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes.⁹ Ello constituye un hito significativo en el fortalecimiento de los Derechos Indígenas, pues aunque doctrinariamente no había duda de que el Convenio 169 de la OIT tenía rango constitucional y que era parte de los llamados Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el que lo haya determinado de manera categórica el TC acaba de una vez con cualquier incertidumbre sobre el tema a futuro y no sólo ello sino que lo convierte en un instrumento jurídico al que se puede apelar como fundamento a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues lo hemos hecho parte de nuestra "Constitución Dogmática".

En consecuencia que la **Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo 001-2012-MC** y la **Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC** cuestionadas en la presente acción popular han trasgredido lo dispuesto por el artículo 6 del Convenio 169° de la OIT al haber excluido a las medidas administrativas vinculadas a la

⁹ Fundamento 31 de la STC N.° 03343-2007-PA/TC

implementación de servicios públicos que afectan a pueblos indígenas del derecho de la consulta previa, por lo que deben declararse su ilegalidad e inconstitucionalidad en la sentencia que expida su judicatura.

El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT resulta muy claro, toda medida administrativa o legislativa que afecte directamente a los pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa, no hace excepciones en caso que sea servicio público o si beneficia o no a las comunidades indígenas, por tanto, cualquier interpretación o norma como las cuestionadas que restrinjan dicho derecho colectivo, con la finalidad de evitar la consulta previa resulta inconstitucional e ilegal, y por generar una excepción no reconocida por el citado convenio.

También contradicen las normas cuestionadas los artículos 2, 3, 5 y 9 de Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa, que establece el derecho de la consulta previa para toda medida administrativa o legislativa que afecte a derechos colectivos de los pueblos indígenas, y ello incluye medidas administrativas que aprueban la ejecución de proyectos vinculados a los servicios público tales como carreteras, líneas férreas, hidro vías, helipuertos, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica, hidroeléctricas, etc.

2.4. RESPECTO A LA MEDIDA LEGISLATIVA O ADMINISTRATIVA A CONSULTAR

Según el artículo 6.1 literal a) de Convenio 169 de la OIT, expresa lo siguiente *"consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente"*. Es decir, toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles directamente sus derechos colectivos como pueblos indígenas debe ser materia de consulta previa, el artículo 6° no especifica si la norma a consultar que afecta positivamente debe ser exonerada de consulta, como lo expresa la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del D.S 001-2012-MC y la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC.

Y surge así la siguiente interrogante ¿Quiénes se encuentran legitimados para determinar qué medidas legislativas o administrativas les pueda afectar directamente positiva o negativamente a los pueblos indígenas?, y la respuesta es que son los propios pueblos indígenas, nadie mejor que ellos para determinar cuándo una norma pueda afectar sus derechos colectivos como colectividad, en consecuencia ningún decreto supremo o resolución ministerial puede pretender resolver los supuestos en los que no cabe consulta previa, máxime si el artículo 6 del Convenio de la OIT no hace excepciones.

El derecho a la consulta previa implica la obligación del Estado de consultar de buena fe, toda medida administrativa o legislativa que impacte en la vida y cultura de los pueblos indígenas, y el derecho de estos, a dar su consentimiento libre e informado, así como llegar acuerdos consensuados. En

ese sentido, las medidas administrativas que aprueban servicios públicos deben ser consultadas en razón a que generan impactos en los derechos colectivos indígenas al amparo del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y los artículos 2, 3 y 5 de Ley N° 29785, Ley de Consulta Previa siendo contrario a ello, por tanto inconstitucional e ilegal, la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785 y la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC.

2.5. EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La consulta previa se efectúa cuando una decisión normativa o administrativa pueda afectar derechos humanos de los pueblos indígenas, la autoridad estatal competente está obligada a informar adecuadamente a las comunidades nativas y campesinas, sus consecuencias probables y los mecanismos de participación indígena relevantes al respecto. En todo caso, cuando la decisión a tomar requiera el conocimiento de información o de documentos de cierta complejidad técnica, estos deberán ser redactados de manera que se facilite su comprensión, y en la lengua del pueblo indígena afectado y según su forma tradicional de comunicación a fin de que pueda ser comprendida plenamente por ellos. La autoridad competente está obligada a establecer plazos idóneos y deberá facilitar a cuenta del titular del proyecto, versiones simplificadas del estudio, sin perjuicio de recurrir a una asesoría calificada. La omisión de difusión de información adecuada previa a la decisión, es causal de nulidad.

El derecho a la Consulta Previa, se puede definir como el derecho que tienen los pueblos indígenas para que el Estado, dentro de un proceso de diálogo intercultural, les consulte sobre los proyectos de inversión que pueden afectar su vida, costumbres y territorio, y tiene por objeto efectuar un análisis consensuado sobre los posibles cambios, beneficios y/o perjuicios que dicho proyecto tendría sobre su comunidad. Agreguemos que este derecho no otorga a los Pueblos Indígenas el derecho a vetar las decisiones estatales. En palabras, de la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso: *"dentro de este marco, los pueblos indígenas podrán expresar su consentimiento al proyecto consultado o hacer llegar sus observaciones y alternativas, para que el Estado, en muestra de equidad y respeto, considere las propias opciones de desarrollo de los pueblos indígenas, en aras de llegar a un acuerdo con dichos pueblos. (...) La consulta podría definirse como el conjunto de actos previos, a una medida estatal, que el gobierno promueve con el objeto de lograr el consentimiento de los pueblos indígenas o llegar a un acuerdo sobre la aplicación de dicha medida."*¹⁰ Acierta la Comisión Multipartidaria cuando señala que *"la Consulta Previa debe hacerse efectiva en el Perú, fundamentalmente por dos razones: a) Por la diversidad étnica y cultural del Perú y, b) Por la exclusión histórica que los Pueblos Indígenas han sido*

¹⁰ Informe Consulta Previa: Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas e Instrumento de Gestión Estatal para el Fortalecimiento de la Democracia. Mayo 2009 p.7.

sujetos en el Perú. Sin embargo, existen otros factores que hacen de la Consulta Previa una necesidad, esto es, la oportunidad de desarrollar una cultura de diálogo, la Consulta constituye un instrumento de prevención y solución de conflictos sociales y además un instrumento de gestión estatal moderno, eficaz, estratégico, transparente, participativo que coadyuvará al fortalecimiento de la democracia.”¹¹

La doctrina reconoce tres tipos de Consulta Previa: a) para medidas legislativas; b) para medidas administrativas, c) Para fines de exploración y explotación de recursos naturales. Dependiendo de la medida que se piense aplicar, la consulta podrá darse en uno o varios momentos, por ejemplo si la medida es legislativa será realizada la consulta en un solo momento, mientras que si se trata de una medida que implique actividad extractiva, está se hará en cada etapa determinante del proceso extractivo. Durante el desarrollo del proceso de consulta, se deberán ejecutar acciones adecuadas para que la participación de los representantes de los pueblos indígenas sea real y efectiva en el proceso de toma de decisiones de la entidad, teniendo en cuenta que su finalidad es llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento.¹²

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

3.1. RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL LITERAL A) DEL ART. 6º DEL CONVENIO 169 POR PARTE DE LA QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DEL REGLAMENTO DE CONSULTA PREVIA Y POR ENDE DE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 013-2016-VMI-MC

El Estado peruano ha suscrito la mayoría de tratados internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas y minorías, así como los tratados de derecho internacional humanitario. De acuerdo a disposiciones internacionales¹³ e internas¹⁴ el Estado peruano está obligado a cumplir los tratados suscritos, reconociéndoles supremacía sobre la normatividad interna.

Los instrumentos internacionales en materia de reconocimiento y respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecen un conjunto de obligaciones para el Estado peruano. Así, interesa resaltar que los Convenios de la OIT referidos a pueblos indígenas fueron introducidos con fuerza vinculante a nuestro ordenamiento jurídico, tales como los Convenio Nº 107 y Nº 169 de la OIT. Así, por la ratificación del Convenio 169 de la OIT el Estado peruano **se obligó** a respetar los derechos de los pueblos indígenas y adecuar la legislación nacional en favor de los mismos.

El Artículo 2º del Convenio 169 OIT, prevé: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los

¹¹ Ibidem.

¹² Informe Nº 011-2009-DP/AMASPPI.PPI. p. 20.

¹³ Ver: Artículos 26º y 27º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Adoptada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980).

¹⁴ Ver: Artículos 55º, 56º, inciso 1, y 57º de la Constitución Política del Perú de 1993.

derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. (...)”. El artículo 4º, “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. (...)”

Por su parte el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT resulta clave en la consagración del derecho a la consulta previa pues establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas toda medidas administrativa o legislativa que pueda afectar directamente sus derechos colectivos, lo que implica proyectos extractivos como mineros, hidrocarburíferos o proyectos de generación de electricidad así como servicios públicos como educación, salud, agua potable y saneamiento, transporte público o líneas de transmisión eléctrica.

En esa misma línea va el artículo 2 de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios se aplica a todas las medidas legislativas o administrativas “susceptibles” de afectarles directamente a los pueblos indígenas. Advirtamos que susceptible, significa capaz de recibir modificación o impresión, en el caso concreto, implica que pueden ser objeto de consulta, las medidas que pueden afectarles directamente a los pueblos indígenas, y no solamente a las que se tiene certeza que las pueden afectar directamente en sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

El mismo artículo señala que “también corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos” con lo cual implícitamente se incluyen los proyectos de inversión relacionados a los servicios públicos. Esto concuerda con una serie de posiciones iusfundamentales, entre las cuales el Tribunal Constitucional ha identificado [STC 0022-2009-PI/TC, Fund. Jur. Nº 37]:¹⁵

- (a) el derecho colectivo a ser consultados ante medidas estatales que afecten directamente sus derechos e intereses grupales. En particular, los que estén vinculados con su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo colectivo;
- (b) el derecho a que la consulta se realice de manera previa y bajo la observancia de los principios de buena fe, flexibilidad, transparencia, respeto e interculturalidad; y
- (c) el derecho a que se cumplan los acuerdos arribados en el proceso de consulta, encontrándose excluido de este programa normativo del derecho a la consulta lo que coloquialmente se ha venido en denominar “derecho al veto”.

¹⁵ Fundamento 5 de la STC Nº 00024-2009-PI

⁴³⁷ Fundamento 6 de la STC Nº 00024-2009-PI

El TC así nos precisa el núcleo esencial del derecho a la consulta previa como derecho colectivo reconocido por la Constitución derivado del derecho a la identidad étnica y cultural, ahora llama la atención que la Ley resalte como criterios a tener en cuenta para efectuar la consulta previa, la existencia física de una población indígena, su identidad cultural, su calidad de vida o su desarrollo colectivo que pueden afectarse cuando se implementa un servicio público como una línea férrea, una carretera, un aeropuerto, una línea eléctrica, un servicio de salud, etc medidas que son objeto por ello de consulta previa.

Nada de ello toma en cuenta la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios y la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC que la desarrolla, y vacía de contenido el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas con relación a los servicios públicos que les afectan directamente tanto positiva como negativamente si no se toma en cuenta un desarrollo intercultural solo posible con la implementación de un consulta previa.

3.2. RESPECTO A LA VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 3, 5 Y 9 DE LEY N° 29785 POR PARTE DE LA QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DEL REGLAMENTO DE CONSULTA PREVIA Y POR ENDE DE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 013-2016-VMI-MC

La ilegalidad y la inconstitucionalidad de la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios y la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC, "Procedimientos para aplicación de lo dispuesto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 29785 radica en que parte de una premisa que contraviene el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 2 de la Ley N° 29785, de consultar toda medida estatal que les afecte directamente, eludiendo dicha obligación mediante de que si le beneficia el proyecto no se consulta, en sus términos: "la construcción y mantenimiento de infraestructura necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta."

El problema radica que la entidad proponente de la medida administrativa relacionada a un servicio público es la que decide ante sí, y de mutuo propio si la misma, beneficia o no al pueblo indígena, y no permite que sean las propias comunidades indígenas afectadas decidan, con lo cual también se vulnera su derecho a la libre autodeterminación quedando vaciados de contenido ambos derechos colectivo, al haber un tercero (entidad pública) decidido de manera inconsulta su futuro sobre la calidad e impactos de servicios públicos que afectan su vida comunal.

59
Cinco y
nueve

También estas normas resultan ilegales e inconstitucionales pues contravienen la finalidad de la consulta previa prevista en el artículo 3 de la Ley N° 29785 que implica alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas de medidas administrativas que les afectan directamente sus derechos colectivos. Y lo peor es que tampoco se respeta el artículo 9° de la Ley de Consulta Previa, establece que "las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas." Ello se debe a que la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios, y la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC, tienen por fin incumplir dicho mandato legal de manera flagrante y evidente.

IV. ADMISIBILIDAD Y PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA

Conforme se aprecia de los numerales anteriores, así como de la indicación de la vía procedimental correspondiente y de los anexos respectivos en los que aparecen detallados los documentos que se adjuntan, la presente demanda ha cumplido con los requisitos señalados en el Código Procesal Constitucional. En atención al día de publicación de la norma cuestionada, se desprende que al momento de interposición de la presente demanda no ha vencido el plazo prescriptorio del derecho para ejercitar la acción popular.

Por su parte, la legitimidad de la demandante se encuentra reconocida meridianamente por el inciso 5) del artículo 200° de la Constitución y el artículo 84° de la Ley N° 28237 (Código Procesal Constitucional).

La competencia del órgano jurisdiccional se encuentra establecida en el artículo 85° del Código Procesal Constitucional.

V. VIA PROCEDIMENTAL

La presente demanda debe tramitarse con arreglo a las normas dispuestas en los artículos 84° al 97° del Código Procesal Constitucional.

VI. MEDIOS PROBATORIOS

A pesar de ser la Acción Popular un proceso constitucional de control normativo que tiene por objeto proteger jurídicamente la primacía de la Constitución y de la ley respecto de normas de jerarquía inferior a la ley, vale decir, un proceso de puro derecho, en el cual resulta improcedente ofrecer como medios de prueba normas jurídicas que forman parte del derecho nacional, sólo corresponde enunciar —mas no acreditar existencia— la norma cuestionada con la presente demanda, en la medida que existe la

obligación de acompañar copia simple de la **Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785**, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios y la **Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC**.

VII. ANEXOS

- 1.a) Fotocopia del documento nacional de identidad del Representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP), Henderson Rengifo Hualinga
- 1.b) Copia de la Vigencia de Poder del representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP), el señor Henderson Rengifo Hualinga
- 1.c) Copia literal de la ficha registral de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP), en que consta que el señor Henderson Rengifo Hualinga es representante legal de la mencionada persona jurídica.
- 1.d) Copia de la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo 001-2012-MC, Reglamento de la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios
- 1.e) Copia de la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC, "Procedimientos para aplicación de lo dispuesto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 29785" publicado el 27 de junio del 2016


PRIMER OTROSI DECIMOS: Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 80° del Código Procesal Civil, otorgamos a nuestros Abogados Patrocinantes: **Lilyan Magaly Delgadillo Hinostroza**, con Registro CAL N° 61662, **Henry Oleff Carhuatocto Sandoval**, con Registro CAL N° 36283, y **Ronald Vásquez Sánchez** con Registro CAL N° 46647, las facultades generales de representación que se refiere el artículo 74° del acotado cuerpo legal, declarando estar instruidos de sus alcances.

POR TANTO:

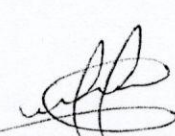
A Usted, Señor Juez, solicitamos admitir la presente acción, tramitarla de acuerdo a su naturaleza y en su oportunidad declararla fundada.

Breña, 01 de setiembre de 2016

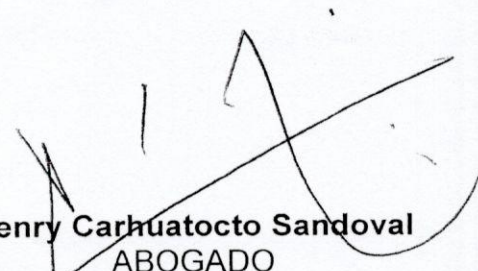
61
sesentay
uw



Ronald Vasquez Sánchez
ABOGADO
CAL N° 46647



Lilyan Delgadillo Hinostrero
ABOGADA
CAL N° 61662



Henry Carhuatocto Sandoval
ABOGADO
CAL N° 36283



HENDERSON RENGIFO HUALINGA
PRESIDENTE
AIDSEP